

LA OLIGARQUÍA TIENE QU

TRAS un cortísimo paréntesis veraniego, esta semana se reanudan las normales actividades políticas. Entre ellas, y sin entrar en complejos órdenes de preferencia, la discusión sobre la crisis económica ocupa un dramático primerísimo plano. Tras el reciente debate parlamentario acerca de las medidas fiscales, la cuestión ha quedado situada en los siguientes términos: el Gobierno, en una discutida pretensión de arbitraje, propone a la derecha que acepte la mini-reforma fiscal presentada en las Cortes a cambio de que los trabajadores, las centrales sindicales y la izquierda acepten una congelación salarial.

DIGA lo que diga el ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, ese es el tablero de juego que ha establecido, o mejor, pretende establecer el Gabinete Suárez: se pide un trueque desproporcionado, un "do ut des" en el que las partes de la proposición no guardan relación alguna entre sí. Cifrando el envite que con graves dificultades internas ha presentado el Gobierno, la cosa resulta de la siguiente manera: una mini-reforma fiscal, algunos de cuyos aspectos han sido calificados positivamente por la izquierda, que va a proporcionar al Tesoro Público algo menos de 22.000 millones de pesetas; frente a ella, frente a esa supuesta contribución de los ricos a la salida de la crisis, una congelación salarial que reduciría los ingresos reales de los trabajadores en 250.000 millones de pesetas.

LA proporción no llega al 1 a 11. Y por ello el planteamiento es inaceptable para la izquierda. Para una izquierda que no pide la retirada del proyecto de reformas fiscales urgentes, sino un cambio de 180 grados en la orientación de la política económica. Las numerosas enmiendas presentadas —ninguna a la totalidad, porque, sorprendentemente, lo impedían las normas— no pretenden arrumbar el proyecto, sino mejorar, hacer más progresivas las leyes fiscales tratadas. La izquierda no está en contra de la reforma fiscal y, por el contrario, pide que sea auténtica y que se aceleren los plazos de su aprobación definitiva.

LA izquierda tampoco está en contra de una negociación para salir de la crisis económica: en sus filas militan los más ardientes defensores de esa negociación. Lo que la izquierda no está dispuesta a admitir, y en este punto, hasta el momento, coinciden PSOE y PCE, son las contrapartidas que el Gobierno pide

a los trabajadores a cambio de la congelación salarial.

LA actitud más clara en este sentido la mantienen las centrales sindicales: se lo han dicho al presidente del Gobierno. Quieren negociar, pero piden contrapartidas más sustanciales y que constituyan un auténtico reparto de las cargas.

Y así, mientras el Gobierno sólo habla de contener la inflación "moderando" el crecimiento de los salarios, las organizaciones sindicales piden atención al paro, a la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

ES necesario volver a recordarlo una vez más. El desempleo requiere una atención urgente que no puede ser postergada por actuaciones de otra índole. ¿Cuántos parados hay? Las estadísticas de desempleo del Ministerio de Trabajo, que son las que sirven de base para las actuaciones oficiales contra el paro, las cifran en 559.588. La encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística habla de 705.800 personas. Los expertos las cifran en 850.000 y las centrales sindicales en un millón.

FRENTE a un hecho de dimensiones tan impresionantes, las centrales sindicales no están dispuestas a transigir. Y al tiempo que piden que desde el Gobierno se lance una seria política de

creación de puestos de trabajo —los 32.000 millones de pesetas para inversiones aprobados hace unas semanas no merecen tal calificativo—, exigen una atención preferente a las dotaciones del seguro de desempleo.

EN la actualidad, con los 40 ó 50.000 millones de pesetas que se destinan a este seguro se asiste a 290.000 trabajadores —la cuarta parte de los parados reales— y eso con una cantidad media de 12.600 pesetas mensuales, que no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional. La petición de las centrales es que el seguro de desempleo cubra el 80 por 100 del salario real —aproximadamente, 257.000 pesetas anuales—, lo cual supondría un desembolso anual de 128.606 millones de pesetas si tomáramos las cifras del Ministerio de Trabajo, de 181.390 si nos basáramos en la encuesta de población activa del INE, de 216.850 si lo hiciéramos en los cálculos de los expertos y de 257.000 millones si tuviéramos en cuenta las cifras de las centrales sindicales.

EL ministro de Hacienda anunciaba en las Cortes que las dotaciones del seguro de desempleo, a cargo de los próximos presupuestos de la Seguridad Social, se iban a elevar hasta 100.000 millones de pesetas. Ha empeñado su palabra y esperamos que se cumpla. Y, sin embargo, ni siquiera con esta dotación adicional se va a poder resolver el problema. Porque el déficit va a seguir siendo impresionante. Si el Gobierno sigue utilizando —cuando hasta las propias fuentes oficiales, como el INE, niegan su validez— las cifras del Ministerio de Trabajo, este déficit ascendería a 28.000 millones de peseta. Si aceptamos los datos de Estadística, sería de 81.000 millones. Con los de los expertos sería de 116.000, y con los de las centrales, de 157.000.

EN términos más directos, la nueva dotación del seguro de desempleo dejará sin ese 80 por 100 del salario real a 108.000 trabajadores, según las increíbles cifras del Ministerio de Trabajo —contestadas por alguno de los actuales ministros cuando hacían su campaña electoral—. Según el INE serían 315.000 los trabajadores sin salario, 451.000 según las cifras de los expertos y 610.000 según las centrales.

ANTE datos como éstos no hace falta insistir demasiado en el porqué las centrales sindicales no están dispuestas



DE CEDER

a un acuerdo con el Gobierno. Si a esta disparidad total de puntos de vista se añade el problema de las pensiones, el desacuerdo básico quedará centrado en su auténtica dimensión. Porque al hablar de pensionistas se está mencionando a la nada desdeñable cifra de más de cuatro millones de personas, deficientes e insuficientemente atendidas por una Seguridad Social que ingresa anualmente más de 800.000 millones de pesetas. Las asociaciones de pensionistas reclaman que ninguna dotación asistencial esté por debajo del salario mínimo interprofesional, considerado el mínimo indispensable, aun cuando "Acción Empresarial" haya venido denunciando desde hace años que no cubre ni la mitad de lo que un matrimonio con dos hijos necesita para vivir.

NUEVE mil pesetas por término medio ganan los pensionistas desde la subida adoptada con fines innegablemente electoralistas el pasado mes de mayo. Subir esas prestaciones hasta el nivel del salario mínimo costaría unos 240.000 millones de pesetas, cifra que no figura en ninguno de los pomposos ofrecimientos del Gobierno. Y en ese problema, no lo olvidemos, están interesados más de cuatro millones de españoles, los que, junto con los parados, viven en la mayor indigencia, las auténticas víctimas de la inflación y de la crisis económica.

OLVIDAR esa realidad social que afecta a cerca de cinco millones de personas no es propósito de las centrales sindicales y de los partidos de izquierda. Exigen para solucionar estos problemas cantidades que rondan los 400.000 millones de pesetas anuales. Es evidente que el Gobierno va a contestar que ese dinero no se va a sacar de la noche a la mañana; y probablemente va a proporcionar como prueba de su voluntad de hacerlo las recientes medidas fiscales. Pero, ¿qué son 22.000 millones de pesetas frente a esos 400.000 millones que hacen falta para satisfacer las necesidades más inmediatas, para permitir la subsistencia de cinco millones de españoles en un clima de inflación y de crisis económica?

NO suponen prácticamente nada. Esa es la estricta realidad. No suponen sino una ridícula migaja arrancada a unas clases poseedoras que han disfrutado de cuarenta años de un paraiso fiscal



El ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, presentando el proyecto de "minirreforma" fiscal en las Cortes.

mucho más productivo que la República de San Marino o Liechtenstein, que les ha permitido enriquecerse hasta extremos increíbles.

UNA migaja que ha provocado reacciones airadas por parte de esa misma derecha, justo es decirlo. Que ha irritado a unas clases acostumbradas a exigir y a que nadie les ponga limitaciones, por pequeñas que éstas sean. Y este es un nuevo motivo de reflexión: porque si hoy se enfadan por 22.000 millones que se podían recaudar haciendo cumplir las actuales leyes fiscales, sin necesidad de reformas, a sólo cuatro o cinco grandes fortunas, ¿qué ocurrirá el día en que se inicie una reforma fiscal en serio?

OCURRIRA que el Gobierno que se atreva a hacerlo tendrá que pedir apoyo político a las clases populares para contrarrestar las presiones de la derecha. La duda que aquí queda es si el actual Gobierno será capaz de recabar ese apoyo.

HABLAR de estas cuestiones en este momento no es superfluo. Porque la crisis económica va a exigir soluciones drásticas, a fondo. El deterioro de la situación económica está provocando tensiones políticas que si hasta hoy se han podido solucionar, apuntan a conflictos mucho más graves para un futuro. Las huelgas de camioneros y panaderos son serios aldabonazos en este sentido.

EL pacto para encontrar una salida colectiva a los problemas económicos es absolutamente necesario. Así lo dicen las centrales y también los partidos de izquierda. Lo que ocurre es que el movimiento obrero y los partidos de izquierda no pueden aceptar las condiciones que para ese pacto propone el Gobierno. No puede aceptar la congelación salarial, ya que esas 50.000 pesetas de aumento lineal significan una reducción del salario real de por lo menos un 6 por 100, que equivale a un pago de 250.000 millones de pesetas como ayuda a la salida de la crisis. No puede aceptar que se postergue, en los términos antes señalados, la solución de los dramáticos problemas de los desempleados. No puede aceptar que se olvide a los cuatro millones de pensionistas que sobreviven a duras penas.

Y el Gobierno no puede hacer más de lo que está haciendo y proponiendo sin exigir un mayor esfuerzo a la derecha económica. Pero a la derecha económica de verdad, esto es, a la oligarquía, a quienes controlan de hecho la economía española a través de la Banca, los monopolios, las prebendas oficiales y hasta con la corrupción. Repartir los costos de la crisis es inevitable; y a ese acuerdo se puede llegar con la condición de que los ricos paguen y de verdad.

LO que ya es dudoso es que este Gobierno se atreva a hacerlo. Su intento de minirreforma fiscal, que habrá que ver cómo se aplica, le ha costado demasiados disgustos y sinsabores que esa derecha económica se ha encargado de proporcionarle. Y da toda la impresión de que de aquí en adelante va a actuar con más calma en este peligroso terreno, que es el del que lo han tenido todo en estos últimos cuarenta años. Y si así ocurre, no habrá pacto ni nada que se le parezca.

PARA salir de la crisis hay que cambiar las reglas del juego de la negociación: los que siempre han pagado no pueden seguir pagando. Y en este inmenso grupo hay que incluir a los pequeños y medios empresarios, sin voz a la hora de las decisiones, crispados por la crisis y víctimas de una política que al no poder afectar a los privilegios de los grandes, se ceba en ellos. Ha llegado la hora de que paguen quienes siempre han recibido: así habrá pacto. ■